

PLAZA DOMINICAL

Miguel Angel Granados Chapa

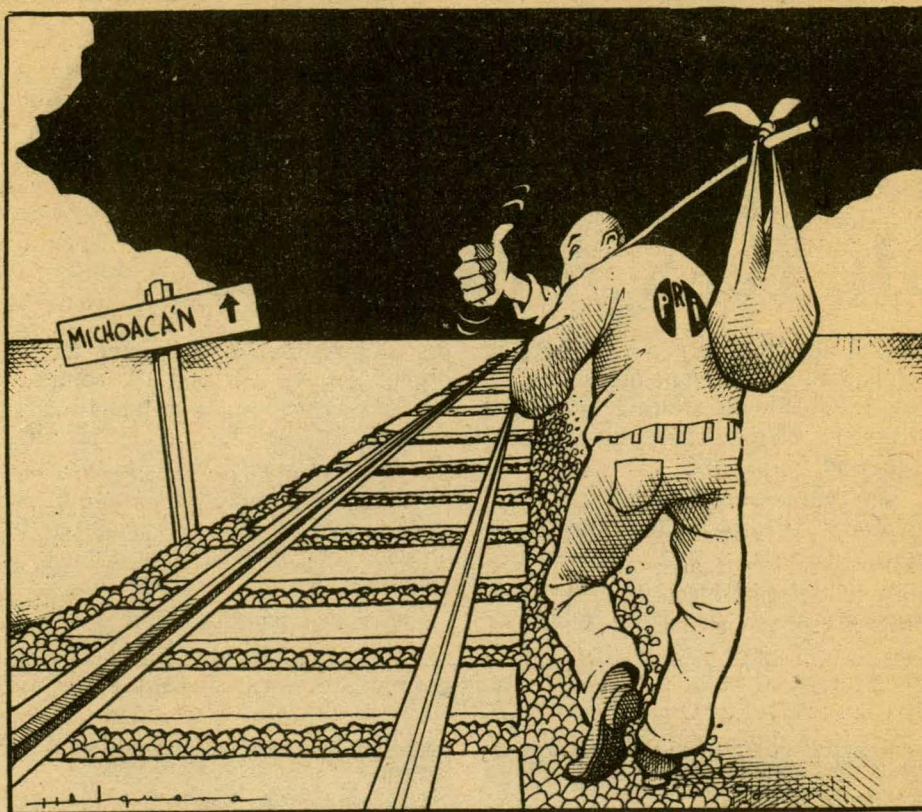
Reforma electoral en riesgo Las iniciativas del PAN

Aunque los asuntos internacionales no sean la materia prima de esta columna, es imposible escribirla hoy sin hacer referencia a la muerte de Jomeini, el gran líder iraní que liberó a su pueblo de una feroz dictadura sólo para imponerle otra; y a los sucesos chinos, en donde el número de muertos, la brutalidad militar contra estudiantes inermes y la vana pretensión de que esa es una manera eficaz de sofocar aspiraciones democráticas, permiten hablar de un Tlatelolco pequinés. En ambos casos, la participación popular en el gobierno es una de las cuestiones clave. Tiene que serlo también entre nosotros.

PLAZA DOMINICAL

Viene de la 1

NI POR FERROCARRIL ■ Helguera



libres y lo demás vendrá por añadidura—pero también aprovechan imaginativamente la nueva situación política nacional. Propone una Cámara de Diputados integrada por un número menor que el actual y con una proporción de dos tercios para el partido mayoritario, de modo que se refleje en los escaños la composición del electorado. La de senadores se integraría por cuatro miembros por cada entidad lo que, juzga Acción Nacional, no implicaría problemas de funcionalidad y en cambio aseguraría una presencia más plural y equitativa de las corrientes partidarias.

De acuerdo con el principio de establecer “órganos especializados, responsables, imparciales, plenamente protegidos...que tengan a su cargo...la organización y vigilancia del servicio público electoral...”, el PAN propone integrar “el Consejo Federal del Sufragio, permanente, profesional y autónomo, formado por tres ciudadanos mexicanos designados por los poderes de la Unión: uno de ellos por la Cámara de Diputados a propuesta de los partidos minoritarios; otro por la Suprema Corte de Justicia a proposición del partido mayoritario y uno más designado por la Cámara de Senadores a propuesta en terna del Presidente de la República. Además, los partidos políticos formarán parte del organismo con cuando menos un miembro y hasta un máximo de tres, en el caso de los que hayan obtenido más del veinte por ciento de la votación nacional en la última elección de diputados...Para presidirlo, se propone al secretario de Gobernación, quien tendrá derecho a voz y a veto, aunque no a voto, en la inteligencia de que el veto es recurrible por los partidos políticos interesados, ante el Tribunal Federal de Elecciones, que dicta la resolución definitiva”. Este último órgano, en la idea panista, se formaría por abogados, mediante insaculación, y “podría corregir, juzgando en conciencia y resolviendo conforme a derecho, cualquier irregularidad o desviación que se dé en el ejercicio e interpretación de la norma legal”.

El PRI, por su parte, en ese tema parece preso entre los apremios inmediatos y el temor a lo desconocido. Por esta

última razón, supongo, el Plan Nacional de Desarrollo es excesivamente genérico en el tema electoral, acaso también porque no hay acuerdo interno en el gobierno y su partido sobre lo que debe ocurrir en esta materia. El acápite “Perfeccionamiento de los procesos electorales y ampliación de la participación política”, incluido en el capítulo 4 del Plan, “Acuerdo Nacional para la ampliación de nuestra vida democrática”, propone los propósitos (sic) y bases siguientes:

—“avanzar mediante el diálogo abierto en el perfeccionamiento de los procesos y procedimientos electorales;

—“asegurar el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las elecciones;

—“vigilar la legalidad de los procesos electorales con una mayor y mejor participación de los partidos;

—“informar de los resultados de las elecciones con una mayor oportunidad y transparencia;

—“garantizar la seguridad personal de los participantes en todos los procesos políticos;

—“mantener el acceso de los partidos a los medios de difusión, y

—“respetar y apoyar el derecho a manifestarse públicamente en el marco de las leyes”.

De esos principios generales, no se pasa a las condiciones concretas. Todo lo más, hay descripciones: “Las normas y prácticas electorales serán modificadas a la luz de realidad...Partidos y ciudadanos son corresponsables de la reforma electoral que ha sido convocada por el Ejecutivo Federal. Se ha garantizado la participación de todas las corrientes ideológicas a fin de asegurar la pluralidad y con ella la riqueza de opiniones y la suscripción de compromisos. Se busca empeñosamente el consenso para construir reglas y procedimientos que expresen la voluntad general”.

A pesar de esa búsqueda empeñosa, los consensos no aparecen. ¿Qué impide ensayar otro modo de localizarlos, mediante la discusión parlamentaria misma, durante un periodo extraordinario convocado por la Comisión Permanente? ¿Por qué no incluir esta

innovación en el catálogo de los hechos insólitos surgidos en los seis meses anteriores? ¿No es hora de que se abandonen los afanes de seguridad, de márgenes amplísimos con que ha solido actuar en el Congreso el partido gubernamental, para arriesgarse a un debate en que no tenga previamente garantizados los acuerdos y las victorias?

Queda, además, la cuestión de cómo se traduce a la práctica electoral el espíritu del Plan. Michoacán podría ser la mejor demostración de la difícil interpretación de la voluntad expresa del Presidente a través de sus operadores políticos. Una hipótesis muy fundada, pero que en este momento no es más que conjetura, indica que la mayor parte de las curules de la legislatura local serán ganadas por el Partido de la Revolución Democrática. Ese es un escenario al parecer inadmisibles para el partido gubernamental. Para evitar su concreción se echa mano de todos los recursos; de todos. Ya se erigen candidaturas de paja rellenas de billetes, ya se monta un mecanismo integral en que se genera violencia para denunciar la violencia. Ese mecanismo serviría, eventualmente, para declarar que la ingobernabilidad del estado autoriza medidas de emergencia como anular las elecciones y empezar de nuevo, esperando que sea mayor el desaliento que la irritación. También se pinta en oscuras tonalidades el panorama de los destrozos institucionales que practicaría un congreso local cardenista, como derribar al gobernador por el solo hecho de que no pertenezca a su mayoría. Esa acusación prejuiciosa, esa sentencia a un delito de intención olvida la paradoja de que el gobernador es interino como resultado de la decisión priista de derribar al gobernador constitucional. O sea que el paso temido ya se dio, pero no lo dio la oposición.

La senadora Laura Alicia Garza Galindo presentó en la Permanente, el miércoles anterior, casi a la misma hora en se daba a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, una aparatosa relación de hechos de violencia cuya génesis atribuyó al cardenismo, o frentismo como prefirió llamarlo. Esta corriente debiera responder puntualmente a cada uno de los sucesos prolijamente enlistados, para desmontar la imagen de agrupamiento agresivo que se le ha endilgado. Y debiera hacer algo más: una enfática condena a los métodos violentos, seguida de la renuncia expresa, o el aplazamiento de su utilización, mientras dure el proceso electoral, de cualquier otro medio de lucha y de presión que no sean los instituidos para la búsqueda del voto. Aun si la arbitrariedad de autoridades municipales impuestas impele a la toma de alcaldías; o la urgencia de contar con tierras para sobrevivir orilla a la ocupación de facto; o la impopularidad de los candidatos gubernamentales y sus campañas entraña una provocación, nada de eso debiera ser causa de acciones cardenistas reñidas con la ley, no sólo para no dar pábulo a la campaña en contra de esa corriente, sino para que sea nítida la diferencia entre su modo de proceder y el de sus adversarios, requisito indispensable a la hora en que los ciudadanos escojan. La violencia perjudica a quien presuntamente puede triunfar, no lo beneficia. Conforme a esa lógica tendría que proceder el cardenismo, que más que el PRI tiene trazas de triunfador.